



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
TUNJA**

Tunja, veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

Medio de control: Reparación directa –llamamiento en garantía
Demandante: Rebeca Escobar y otros
Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Ejército Nacional.
Radicado: 15001 33 33 004 **2018 00094 00**

Procede el Despacho a resolver la solicitud de llamamiento en garantía presentada por el apoderado de la parte demandada

I. ANTECEDENTES

La apoderada de la Nación-Ministerio de Defensa Ejército Nacional, junto con la contestación de la demanda, formuló llamamiento en garantía contra el señor Luis Eberto Díaz Molano, con fundamento en los siguientes supuestos fácticos:

- La parte demandante, en uso del medio de control de reparación directa, demandan la indemnización de los perjuicios causados con ocasión del homicidio en la persona de Raúl Delfín Sandoval Escobar, siendo coautor Luis Eberto Díaz Molano.
- En la demanda se señaló que Luis Eberto Díaz Molano, para la época de los hechos, era civil del Ejército Nacional en el grado de adjunto segundo (D2), siendo orgánico de la RIME5, y retirado en el 2005.
- El Juzgado Penal del Circuito Especializado profirió sentencia el 13 de julio de 2012, dentro de la causa 150013107001201000006 en contra de Luis Eberto Díaz Molano, por el delito de homicidio agravado y otros, la cual cobró firmeza el 31 de octubre de 2013.

Como fundamentos jurídicos citó el artículo 90 de la Constitución Nacional, los artículos 19, 20 y ss. de la Ley 678 de 2001 y los artículos 55 y 57 del Código de Procedimiento Civil (fls. 1- 3 cuaderno llamamiento en garantía)

II. CONSIDERACIONES

El llamamiento en garantía se funda en la existencia de una relación legal o contractual, que condiciona a un tercero ajeno de los intereses de la *Litis*, a los resultados de la misma¹. Dicha figura se encuentra regulada en el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011, y faculta a quien afirme tener derecho legal o contractual a solicitar la citación de un tercero a fin de exigirle la reparación integral del perjuicio

¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto de 13 de agosto de 2012, C.P.: Jaime Orlando Santofimio. Expediente: 43465. Sobre el llamamiento en garantía esta Corporación ha precisado: “Esta institución encuentra su razón de ser en el principio de economía procesal, ya que dentro de la misma actuación que se adelanta con motivo de la *Litis* trabada entre demandante y demandado es posible decidir si se reúnen las condiciones para que, en virtud del vínculo jurídico invocado por quien llama en garantía, el tercero deba responder por las condenas impuestas a este. Se trata, entonces, de la configuración de dos relaciones jurídico-procesales distintas dentro del mismo proceso, una principal entre el demandante y el demandado, y otra eventual entre el demandado y el tercero llamado en garantía.”

que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.

De igual modo, la señalada norma establece que el escrito de llamamiento deberá contener los siguientes requisitos:

“1. El nombre del llamado y el de su representante si aquel no puede comparecer por sí al proceso.

2. La indicación del domicilio del llamado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación de que se ignoran, lo último bajo juramento, que se entiende prestado por la sola presentación del escrito.

3. Los hechos en que se basa el llamamiento y los fundamentos de derecho que se invoquen.

4. La dirección de la oficina o habitación donde quien hace el llamamiento y su apoderado recibirán notificaciones personales.”

Finalmente, el artículo en mención dispone que ***“El llamamiento en garantía con fines de repetición se registrá por las normas de la Ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen.”*** (Negrilla del Despacho)

Entonces, es claro que es procedente llamar en garantía con fines de repetición dentro de los procesos ordinarios donde se discute la responsabilidad de una entidad pública, y el mismo se rige por las disposiciones de la Ley 678 de 2001, cuerpo normativo que en su artículo 19 establece:

“Llamamiento en garantía. Dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad pública directamente perjudicada o el Ministerio Público, podrán solicitar el llamamiento en garantía del agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del funcionario.

PARÁGRAFO. La entidad pública no podrá llamar en garantía al agente si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor.

En cuanto a la normatividad que se acaba de referir, y específicamente frente a la figura del llamamiento en garantía con fines de repetición, el Tribunal Administrativo de Boyacá, señaló:

“... el llamamiento en garantía con fines de repetición, reviste un carácter especial que implica un manejo diferenciado, toda vez que la misma ley prevé una regulación específica, establecida en la Ley 678 de 2001, razón por la cual, al juez corresponde examinar su procedencia a partir de los siguientes factores: i) que el escrito reúna los requisitos del artículo 225 del CPACA, ii) que se acredite la relación legal o contractual entre el demandado y el tercero, iii) que se acompañe el escrito de llamamiento con la prueba aunque sea sumaria del actuar doloso o gravemente culposo del agente llamado en garantía y, iv) que el llamante no haya propuesto en

la contestación de la demanda las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor."²

III. CASO CONCRETO.

En primer lugar, en lo relativo a la oportunidad, se encuentra que el artículo 172 del CPACA dispone que en el término de traslado de la demanda, la entidad demandada deberá contestar la demanda, proponer excepciones, solicitar pruebas, llamar en garantía, y, en su caso, presentar demanda de reconvención. En el presente asunto, el término de 30 días de que trata la norma, corrió desde el 2 de agosto y hasta el 14 de septiembre de 2018 (fls. 251), y como la contestación se radicó el día 14 de septiembre de 2018 (fls. 252-262), juntó a la cual se elevó la solicitud de llamamiento en garantía, se tiene que fue presentado oportunamente.

Ahora bien, al examinar el llamamiento en garantía incoado, es pertinente hacer las siguientes precisiones:

- La apoderada adujo que le fue imposible acceder a la información del centro penitenciario donde el señor Luis Eberto Díaz Molano cumple su condena (fl. 3 cuaderno llamamiento en garantía); sin embargo, no demostró haber adelantado gestión alguna ante el INPEC —institución adscrita al Ministerio de Defensa—, a fin de determinar el domicilio y la dirección de notificaciones del llamado.
- Se demostró la relación legal entre la entidad demandada y el llamado, pues en la contestación y el escrito de llamamiento se aseguró que el señor Luis Eberto Díaz Molano, para la época de los hechos, se encontraba vinculado al Ejército Nacional en el grado de adjunto segundo (D2), información que es respaldada por las sentencia dictadas en la causa penal número 15001310700120100006, seguida contra el llamado en garantía (fls. 90-191).
- A juicio del Despacho, las sentencias de 13 de julio de 2012 y 30 de mayo de 2013, dictadas dentro del a causa No. 15001310700120100006, por el Juzgado Penal Circuito Especializado de Tunja y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, respectivamente (fls. 90-191), constituyen prueba sumaria del actuar doloso del señor Luis Eberto Díaz Molano.
- En la contestación de la demanda se propuso la excepción que la parte demandada denominó: "*CULPA EXCLUSIVA Y DETERMINANTE DEL TERCERO Y DE LA CULPA PERSONAL DEL AGENTE*" (fl. 260), la cual se fundamentó en que el homicidio agravado del señor Raúl Delfín Sandoval Escobar, entre otros, fue perpetrado material e intelectualmente por un grupo subversivo al margen de la ley y, adicionalmente adujo que "*el señor Luis Heberto Díaz Molano, como miembro activo de dicha organización criminal e infiltrado en la institución del Ejército Nacional, prestaba colaboración a las autodefensas campesinas del Casanare, es decir, los daños ocasionados no se dieron en cumplimiento de órdenes impartidas por la institución sino por el actuar personal e independiente que tenía como propósito la obtención de recursos económicos que ingresaban a su patrimonio...*" (fl. 260)

Con sustento en lo expuesto, de una parte, puede colegirse que la solicitud de llamamiento no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 225 de la Ley 1437 de 2011, y de otra, que la misma no resulta procedente, teniendo en cuenta

² Despacho No. 5, MP Clara Elisa Cifuentes Ortiz, auto de 27 de abril de 2018, Expediente: 15001-3333-008-2017-00090-01

que la entidad demandada formuló como eximente de responsabilidad la culpa exclusiva y determinante de un tercero —circunstancia en la que sustentó su defensa a lo largo de toda la contestación a la demanda—, en contravía de lo preceptuado en el párrafo del artículo 19 de la Ley 678 de 2001.

Valga mencionar que este último aspecto no puede corregirse, contrario a los requisitos de forma contenidos en señalado el artículo 225. Consecuencialmente, el Juzgado no aceptará el llamamiento en garantía formulado por la parte demandada.

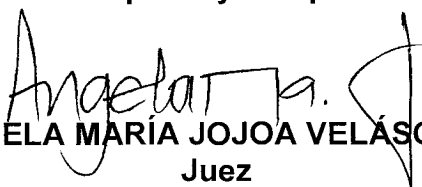
Por lo anterior, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja,

RESUELVE:

PRIMERO: No aceptar el llamamiento en garantía formulado por la Nación-Ministerio de Justicia-Ejército Nacional contra el señor Luis Eberto Díaz Molano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO:- Reconocer personería a la abogada Nidia Fabiola Rodríguez Montejo, identificada con C.C. N° 40.040.413 y T.P. N° 142.835 del C.S.J., para actuar como apoderada judicial de la Nación-Ministerio de Defensa Ejército Nacional, en los términos del poder especial visto a folio 263 del expediente.

Notifíquese y cúmplase.


ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ
Juez

³CZ.

<p>JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA</p> <p>NOTIFICACIÓN POR ESTADO</p> <p>LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO</p> <p>N° <u>62</u> De Hoy <u>23</u> de noviembre de 2018 A LAS 8:00 a.m.</p> <p>FERNÉY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ SECRETARIO</p>

³ Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 23 de noviembre de 2018 en la página web www.ramajudicial.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario